

HONDURAS: SEIS MESES DE GOBIERNO DE 1983

Ernesto I. Castellanos

RESUMEN

Con este artículo ECA abre sus páginas a una realidad centroamericana que hasta ahora había estado ausente, Honduras. En los últimos meses los planes militares de la Administración Reagan han hecho de Honduras una pieza fundamental de su ajedrez militarista en el área. En este artículo se analizan globalmente los seis primeros meses de 1983 de la realidad nacional hondureña, atendiendo a sus elementos económicos, políticos y sociales. Honduras ha sido un país tradicionalmente en crisis, pero en este semestre la crisis se ha agudizado profundamente. A continuación el lector encontrará un interesante análisis de la crisis tanto en sus raíces nacionales como internacionales, es decir, norteamericanas.

Frente a los grandes temas que hoy preocupan a la opinión pública, sólo un análisis continuado y cuidadoso, a lo largo de varios meses, puede darnos las pistas que nos hagan profundizar en la comprensión de la crisis. Crisis global de nuestro país que muestra toda una serie de facetas económicas, políticas y sociales cada día más graves, y cuyas causas tienen con frecuencia un origen extra-nacional, sin que ello atenúe, por supuesto, la responsabilidad de los actuales hombres del poder.

La problemática económica

Honduras está pasando una crisis económica. En un ambiente de recesión mundial, nuestro pequeño país agroexportador ha visto cómo los precios de sus productos se derrumbaban, cómo

encarecían los insumos de su pequeña industria que, aunque trata de sustituir importaciones, importa todavía la materia prima. La dependencia económica de los Estados Unidos principalmente, la efervescencia política regional, la corrupción administrativa, la fuga descarada y masiva de divisas, vinieron a agravar la situación precisamente en la curva ascendente de la crisis. El endeudamiento externo se presentó como la única salida, creciendo desmesuradamente en los últimos años y aumentando la dependencia y los problemas económicos del gobierno que tiene que desembolsar casi un 15% de su presupuesto anual en el servicio de la deuda externa.

En este contexto no tardó en aparecer el Fondo Monetario Internacional (FMI) imponiendo toda una serie de condiciones ya clásicas para los países en vías de desarrollo. Reducción

drástica del gasto público, eliminación de subsidios, contención de presiones salariales, contención del crédito, traslado de los efectos inflacionarios al consumidor final. Y todo ello acompañado de una serie de impuestos (al consumo) que hacen que éstos alcancen una proporción aproximada del 8 a 2 con respecto al impuesto sobre la renta. La receta, evidentemente, no ha hecho más que agravar la situación hondureña beneficiando únicamente a las grandes empresas que se han visto incluso eximidas de cierto tipo de impuestos o deudas con el gobierno. El FMI tiene en sus manos los medios de presión para imponer este tipo de medidas y no duda en utilizarlos. En mayo el ministro de hacienda, en un memorándum confidencial, reconocía que de no seguir los lineamientos del FMI no habría manera de avalar la renegociación de la deuda externa y "el país se vería obligado a pagar los vencimientos de amortización correspondientes a 1981-83 por un monto de US \$90 millones". No habría tampoco posibilidades de renegociar un nuevo préstamo de más de 50 millones de dólares con el Banco Mundial, no se podrían utilizar los recursos de la ayuda proporcionada por Estados Unidos a través del Programa Económico para la Cuenca del Caribe y, para finalizar, "la banca comercial extranjera no estaría dispuesta a conceder al país préstamos a corto plazo para financiar pre-exportaciones y exportaciones (Tiempo, 14 de mayo de 1983).

Algo semejante acontece en las relaciones económicas con los Estados Unidos. El embajador Negroponte, cuyos rasgos proconsulares son frecuentes y enérgicos, señaló desde los inicios del año pasado los rumbos que debería seguir la economía hondureña. Desde entonces no ha cesado de intervenir dando consejos y sobre todo defendiendo a las transnacionales cuando éstas tienen algún tipo de diferencia con el gobierno hondureño. Durante este semestre su intervención para que el gobierno rebajara el impuesto a las cajas de banano a la Tela Rail Road Co. (un ahorro de 12 millones de dólares para la empresa) recuerda los tiempos en que en la secretaría de Estado norteamericana se identificaban los más altos cargos con los accionistas de la United Fruit (caso Foster Dulles). Otros hechos, como la supresión de una inminente condena judicial contra la ITT a cambio de una concesión evidentemente ventajosa para la transnacional, o el pago bajo presión de una muy oscura y discutible deuda a la Construction Aggregates Corp., no



dejan lugar a dudas sobre nuestro grado actual de dependencia económica. Los 90 millones de dólares entregados por la AID en préstamos y ayudas durante el año 82 constituyen la argumentación del embajador. Argumentación que le lleva incluso a intentar imponer el criterio imperial en torno a la política poblacional de Honduras. "Sería poco franco —afirmaba este último mayo— si no mencionara las consecuencias potenciales para Honduras de continuar aumentando la población al mismo ritmo. Un estudio realizado por contratista de AID revela que si la población continúa aumentando a un ritmo de 3.6% anual, el país tendrá en el año 2025, 21 millones de habitantes. ¿Qué clase de presiones sociales creará? ¿Qué efectos tendrá en la distribución de la tierra y en la productividad?" (La Tribuna, 7 de mayo).

A esta realidad de dependencia se han venido a sumar otros factores. La economía ha estado mal manejada. La cuota del café ha sido sustancialmente rebajada para el presente año, se han perdido las ventajas en la compra del petróleo que ofrecían México y Venezuela, la politiquería ha minado la seriedad de nuestra representación ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. La caída del ministro de economía durante este semestre, entre acusaciones de mala gestión, no soluciona la situación. Según informes técnicos, Honduras perderá este año 30 millones de dólares en divisas a causa de la caída del precio del café. La Conadi y otras

empresas del Estado continúan en quiebra. La Cohdefor se ha metido en la ejecución de un desastre maderero capaz de desertificar a Honduras en lo que queda de siglo. La corrupción ha vuelto a mostrar sus colmillos después de un año en el que parecía que había sido casi domesticada. La razón política tradicional se impone a la probidad administrativa.

El pueblo, entre tanto, ve con preocupación el deterioro de la economía. Incluso los trabajadores de la FECESITLIH, federación obrera afiliada a la ORIT y nada sospechosa de animosidad contra el gobierno, censuraban acremente a los actuales gobernantes por haber cedido a las presiones del FMI. "Con ello han puesto en práctica medidas tan impopulares como los impuestos directos e indirectos que están lesionando la economía de miles de trabajadores" (*La Tribuna*, 2 de mayo). Casi simultáneamente una investigación no gubernamental demostraba que el 66% de la población económicamente activa de Honduras se hallaba afectada por problemas ocupacionales.

La problemática política

La gravedad de los problemas económicos haría suponer una repercusión dominante en el pequeño mundo de la política hondureña. Sin embargo, los problemas que han llenado las páginas de los periódicos son muy otros. Honduras ha vivido durante este primer semestre un fuerte aumento de las tensiones con Nicaragua. Y en esto los intereses políticos se superponen sobre los económicos, dado el caso de que es precisamente con Nicaragua con el único país con el que Honduras presenta una balanza de pagos positiva en su relación comercial en Centroamérica. Estos intereses políticos evidentemente no tienen su origen en Honduras, pero se han superpuesto y han dominado a las tradicionales preocupaciones políticas criollas. Se trata, en definitiva, de un proyecto norteamericano en el que Honduras está siendo utilizada como cabeza de puente para presionar a Nicaragua y eventualmente derrocar incluso su gobierno. La tensión entre "guerra encubierta", reconocida por la CIA, y guerra declarada, ha cubierto los seis primeros meses de este año con una evidente escalada bélica al concluir el primer semestre.

En los análisis de coyuntura es necesario con frecuencia leer entre líneas las declaraciones de los políticos. La política del "gran garrote" ini-

ciada nuevamente por Reagan nos evita todo este tipo de reflexión ante un lenguaje tantas veces ambiguo. El anciano presidente norteamericano habla sin embages y no se tiente la conciencia al llamar "combatientes de la libertad" a ex-somocistas que adoptan nombres tan sintomáticos como "Comandante Veneno", "Comandante Suicida" o "Comandante Rasputín". Los 19 millones de dólares para acciones encubiertas de la CIA se pretende que sean este año 80. El general Meyer, jefe del estado mayor del ejército norteamericano no duda en afirmar que en caso de guerra "estaríamos dispuestos a respaldar a Honduras, no sé cómo podríamos dejar de ir". Todo ello al tiempo que anunciaba la ayuda norteamericana para seis pistas de aterrizaje de emergencia en Honduras que puedan ser utilizadas con fines militares. El mismo R. Stone, embajador especial para Centroamérica, no se queda atrás al referirse a Nicaragua y no duda en afirmar que "si no quieren la paz serán vencidos". O hablando de las gestiones de Condatadora, que si "nos convencemos que Nicaragua está ganando tiempo, vendrá la limpieza". Evidentemente en esta limpieza Honduras tendría un papel predominante como lo prueba la sistemática creación de infraestructura de guerra de nuestro país financiada por los Estados Unidos. La instalación de un radar manejado por soldados norteamericanos, las visitas de altos jefes del ejército norteamericano, entre los que hay que resaltar al general W. Odom, jefe del estado mayor adjunto del ejército norteamericano para cuestiones de inteligencia, y al general Meyer, jefe del estado mayor condecorado solemnemente por el presidente de la República, nos indican la importancia que Honduras tiene para los estrategas del Pentágono. La presencia de una base norteamericana en Honduras, saltándose alegremente todas las normas del país para este tipo de posibles establecimientos y entrenando a soldados de El Salvador renuente a solucionar los diferendos fronterizos con Honduras, nos demuestra quién dirige los hilos militares de nuestro país. La condecoración al general Alvarez en Estados Unidos fue para premiar a un hombre que, según Caspar Weinberger, secretario de la defensa norteamericano, se había esforzado infatigablemente por "fomentar el profesionalismo en las Fuerzas Armadas de Honduras, alentar el éxito del proceso democrático en su país y promover la paz y la estabilidad duradera en América Central". El general Alvarez, por su parte, hablaba de la necesidad de 400 millones de dóla-



Honduras ha vivido durante el primer semestre de 1983 un fuerte aumento de las tensiones con Nicaragua... los intereses políticos se superponen a los económicos, Nicaragua es precisamente el único país centroamericano con quien Honduras presenta una balanza comercial de pagos positiva.

res en tres años como ayuda norteamericana en armamento, alentado, por lo visto, en sus deseos de "paz y estabilidad duradera". Una ayuda de ese calibre sobrepasa con mucho las necesidades de defensa de Honduras y hace pensar en la voluntad militar hondureña de intervenir con una mayor autonomía en los conflictos de la región. Las palabras del general Alvarez en entrevista a la revista *Times* (13 de junio) orientan hacia ello: "Yo creo que pronto se va a producir una insurrección general en Nicaragua. Va a llegar un momento en que la oposición necesitará un considerable apoyo logístico; sería muy triste que no lo recibiera". El apoyo logístico evidentemente, tendría que pasar por Honduras, al parecer con el total asentimiento del general que añade en la misma entrevista que sería una lástima que se "repitiera el fracaso de Bahía de Cochinos con el total descrédito de los Estados Unidos".

En resumidas cuentas, durante estos tres meses se ha producido un aumento notable del "apoyo logístico" a los contras que operan en Nicaragua. De operar una radio contrarrevolucionaria en Tegucigalpa (Radio 15 de Septiembre, en el barrio denominado El Hatillo) y de mantener campamentos de "contras" entrenándose en las cercanías de la frontera nicaragüense, se ha pasado a la construcción de toda una infraestructura que permita el apoyo norteamericano

a una guerra de agresión. La llegada masiva de armamento, las maniobras de Pino Alto en las que participaron 1,200 soldados norteamericanos, las proyectadas maniobras para el segundo semestre en las que 4,000 soldados norteamericanos permanecerán por casi seis meses en territorio hondureño, la construcción casi iniciada de los aeropuertos de emergencia (como el de El Aguacate, en las cercanías de Catacamas, Olancho), el intento de reactivación del CONDECA, los 120 asesores norteamericanos instalados en una base a la que se le quiere dar una apariencia inofensiva llamándola "escuela", la instalación de un potente radar en las cercanías de Tegucigalpa, y una bien orquestada campaña publicitaria que insiste en una inminente agresión nicaragüense, son los rasgos físicos que complementan las declaraciones de dirigentes políticos o militares tanto de Honduras como de los Estados Unidos. Se trata así de asegurar que cualquier **casus belli** entre Honduras y Nicaragua se convierta automáticamente en una guerra de intervención norteamericana. El proyecto de la CIA (según cable de AFP del 25 de julio) de mantener a 15,000 hombres en pie de guerra en el interior de Nicaragua y aumentar a 80 los millones de dólares para "operaciones encubiertas", no deja lugar a dudas respecto a la posibilidad de un enfrentamiento de mayores proporciones y una

internacionalización del conflicto, máxime cuando la mayor parte de la ayuda norteamericana tiene obligadamente que hacer escala en este pequeño país, con el único gran defecto de tener una frontera montañosa de casi 1,000 Km con Nicaragua.

Las protestas de numerosos sectores no parecen hacer mella en los actuales conductores de la política criolla. La "aplanadora liberal" en el Congreso se adapta a cualquier necesidad militar o a cualquier exigencia política de los Estados Unidos. Las tensiones que, según rumores, se producen con cierta frecuencia entre sectores civiles y militares con respecto a la escalada belicista, se resuelven siempre en favor del interés militar. Cuando ya en marzo del 82 se hablaba de la instalación de una base militar en Honduras, el entonces ministro de defensa, coronel José Serra Hernández, explicaba los trámites que se deberían seguir para su establecimiento: "en primer término una solicitud del gobierno norteamericano tiene que dirigirse al gobierno de la República, ya que estamos en un régimen de derecho. Luego tendría que turnarse a las fuerzas armadas para que analicen la conveniencia o no para el país, y finalmente la petición sería enviada al Congreso Nacional, que en última instancia la autorizaría o denegaría". Sin embargo, el proceso seguido fue totalmente otro. Las Fuerzas Armadas de Honduras negociaron primero con el Pentágono, mientras los civiles negaban la existencia de cualquier negociación, y posteriormente se presentó el hecho consumado al Congreso, que aprobó rápidamente el asunto sin detenerse demasiado en la discusión. Los cuatro votos en contra, del Pinu y la Democracia Cristiana, tuvieron un valor puramente simbólico ante el oportunismo y el miedo de los dos partidos mayoritarios.

Este oportunismo y dependencia de los intereses militares más agresivos del país, se pone en especial evidencia en el modo de llevar la política exterior. Los medios de comunicación han mantenido una campaña que insiste en que por fin Honduras tiene una política exterior coherente. Se añade que la presencia de buenos técnicos en el ministerio incide efectivamente en los éxitos políticos. Sin embargo, la realidad es que el único éxito político ha consistido hasta el momento en seguir y defender ciegamente las tesis norteamericanas sobre la problemática regional. Los éxitos se han tenido con Jeanne Kirkpatrick o con Richard Stone, que no dudan en poner a

Honduras en parangón con la "democracia salvadoreña" al afirmar que "visitar las nuevas democracias de Honduras y El Salvador ha sido una experiencia muy conmovedora" (**La Tribuna**, 11 de febrero de 1983). Se ha tenido éxito en obedecer, en adaptarse y hacer propaganda de los intereses norteamericanos en los foros internacionales. Pero no se ha podido evitar que el embajador itinerante francés, Antoine Blanca afirmara que "personalmente pienso que existen campamentos somocistas en territorio hondureño". Y ni México ni Venezuela, ni mucho menos ningún país europeo, han podido condecorar al canciller hondureño por sus esfuerzos en favor de una paz "duradera y estable" en Centroamérica. Ni siquiera se ha tenido fuerza para negociar la delimitación fronteriza con El Salvador a cambio del entrenamiento de soldados salvadoreños en nuestro propio territorio. Entrenamiento que, probablemente, considerarán nuestros diplomáticos como un éxito ya que alivia a los Estados Unidos de las tensiones internas que le produciría el hacerlo en su propio territorio. Al fin y al cabo, parece que solamente eso cuenta. Aunque también se hayan hecho esfuerzos por mejorar las relaciones con Ríos Montt, con un Israel dispuesto a ayudar militarmente a Honduras en caso de necesidad (ya está enviando a los contras las armas decomisadas en El Líbano a los de la O.L.P.), y se haya conseguido el respaldo "militar" de Huber Matos en una posible guerra contra Nicaragua.

Los derechos humanos

El interés por los derechos humanos del actual gobierno podría quedar reflejado en el hecho de que un año después de la toma del poder por los liberales, permanecían todavía en la penitenciaría central de Tegucigalpa 604 reos que llevaban más de 10 años esperando a que se les dictara sentencia (**La Tribuna**, 25 de febrero). Aunque la Constitución establece defensores de oficio, y aunque el actual gobierno prometió desde el principio sanear al poder judicial, lo cierto es que las cosas no han cambiado demasiado al respecto. Lo mismo podríamos decir de un desalojo de tres mil personas, en el que la policía utilizó maquinaria pesada para destruir las casi 500 viviendas en las que se alojaban, sin dar tiempo para que los inquilinos retiraran sus pocas pertenencias. Pero todo esto ha sido parte del trágico folklore del subdesarrollo hondureño y nunca ha preocupado demasiado. Es algo casi

ran consuetudinario como el hambre, la desnutrición o la falta de educación o trabajo, que casi nunca se han considerado como violaciones "serias" de los derechos humanos.

En los últimos tiempos, sin embargo, la cosa se ha complicado, y las violaciones de los derechos humanos comienzan a convertirse en asesinatos, desapariciones, etc. De enero a mayo del presente año, 38 personas han sido asesinadas, según informes de los periódicos, en circunstancias que, o bien implican total o parcialmente a fuerzas militares (policía fundamentalmente), o bien sugieren la existencia de una especie de escuadrón de la muerte que de momento se ceba en supuestos delincuentes comunes. De los 38 asesinados, 19 son muertos cuyos nombres han quedado en el anonimato. Presentaban casi todos ellos señales de haber sido ajusticiados; rastros de ataduras en pies y manos y varios disparos en cabeza y tórax a poca distancia. Los otros 19 fueron asesinados en circunstancias no aclaradas o bien murieron en las mismas "bartolinas" de la Fusep. Aunque sus muertes no fueron aclaradas, los familiares de los difuntos no dudaron en acusar a fuerzas de seguridad del Estado. Entre estos muertos figuraban 5 que murieron en las celdas de la policía en circunstancias difíciles de explicar. En efecto, las explicaciones de la misma policía tendían a causar estupor: José Gilberto Flores murió al día siguiente de ser detenido de un "ataque de hipertensión" (*La Prensa*, 21 de enero); Juan Patrón, supuesto espía nicaragüense, murió a causa de "fallas respiratorias e irregularidades cerebrales". Con cierto sarcasmo macabro la nota policial añade que el espía "empezó a sentirse enfermo desde el día en que fue capturado". Roberto Amaya, de 32 años, murió "de goma". Marco Tulio Gómez, de 28 años, murió en las celdas de la D.N.I. de Tegucigalpa "por muerte súbita", según dictamen del forense (*Tiempo*, 6 de mayo). Y por fin José Urbano Amaya, de 23 años, murió de un supuesto "paro cardíaco". Los cinco eran jóvenes y habían gozado de buena salud hasta antes de ser apresados.

Dagoberto Padilla, y otros tres sindicalistas de la Costa Norte, fueron asesinados por un cabo Molina, quien declaró que obedecía "órdenes su-

periores" y que tenía motivaciones anticomunistas. Este caso es el único de asesinatos de tipo político que hasta el momento se ha resuelto. Poco después de morir José Luis Álvarez en una clínica progresaña a causa de golpes recibidos, según sus propias declaraciones, en las celdas de la Fusep, el segundo encargado del D.N.I. en Progreso declaraba textualmente: "Nunca lo golpeamos, sólo lo torturamos psicológicamente". El cabo Ascención Baquedano intentó asesinar a sangre fría al preso Gustavo Sandoval cuando éste salía de rendir declaraciones en la Corte Suprema. Hay constancia fotográfica de que el preso ni intentó escapar ni realizó ningún tipo de agresión contra sus custodios. Sin embargo, se impuso la versión del policía porque la fotografía no constituye prueba en nuestros tribunales (las fotografías fueron publicadas por *Tiempo*).

Si en el terreno de las muertes hay un sin fin de irregularidades, el tema de los desaparecidos demuestra una mayor implicación policial en la violación de los derechos humanos. En estos mismos meses de enero a mayo desaparecieron 15 personas, de las cuales reaparecieron 5 en el mes de junio. Más todavía que los asesinatos, el tema de los desaparecidos había calado en la opinión pública, tanto por el drama mayor que comporta para las familias afectadas, como por la seguridad de que estando en manos de cuerpos de seguridad del Estado algo se podría conseguir respecto a su liberación. El Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras, COFADEH, se mantuvo en una mayor actividad a lo largo de este semestre y lo mismo la Comisión de Derechos Humanos de Honduras. Gracias a ellos el tema adquirió una dimensión que forzó en un primer momento a militares de alta graduación a pronunciarse sobre el tema. El director de la D.N.I. retó en marzo a la Comisión de Derechos Humanos a que demostrara que 60 personas estaban detenidas en las cárceles de dicho cuerpo policial. En abril, el coronel Tábora Bográn, al mando del tercer batallón de infantería con sede en Naco, afirmaba que los desaparecidos se estaban entrenando en países comunistas "para venir a joder a Honduras" (*La Tribuna*, 6 de abril). Ya en mayo, y refiriéndose al secuestro y desaparición de

Los éxitos de la política exterior hondureña se han tenido con J. Kirkpatrick y Stone, quienes no dudan en poner a Honduras en parangón con "la democracia salvadoreña" y para quienes visitarlas ha significado "una experiencia muy conmovedora."

Efraín Duarte y Marco Antonio Flores, el mismo Juan Blas Salazar, director de la D.N.I., decía lo siguiente: "No hay ninguna denuncia que pudiera haber motivado a los cuerpos de seguridad para realizar el arresto de estos señores, el cual hubiese sido efectuado en la forma acostumbrada, no haciéndolos aparecer como secuestrados". En el mismo mes el coronel Balí Castillo, comandante de la fuerza de seguridad pública (a la que está adscrita también la D.N.I.) trataba el tema de los desaparecidos dos veces. Primero para decir "no utilizamos este sistema (secuestro) porque respetamos lo establecido en la Constitución de la República". Y posteriormente prometiendo informar al pueblo hondureño de "cómo los desaparecidos son parte de la estrategia comunista para llegar al poder". Mientras los militares daban su versión del asunto, los civiles en el poder rehuían el tema y procuraban por todos los medios que no adquiriera el derecho a estudio y discusión en el Congreso. Sólo Suazo Córdova, tras la visita de unos congresistas norteamericanos, hizo una débil promesa de investigar la situación de los desaparecidos.

Cuando reclamar el derecho de los desaparecidos se veía casi como delito, se dio un cambio brusco en la situación. Reapareció primero Efraín Duarte en Guatemala, autoconfesándose dirigente de una organización revolucionaria hondureña y manifestando estar arrepentido y

haberse entregado voluntariamente a la policía hondureña. Después de 20 días de desaparición, y tras tan sistemáticas negativas de la policía hondureña de tenerlo en su poder, la explicación del desaparecido ofrecía demasiadas lagunas. Pero la cuestión se fue aclarando cuando sucesivamente fueron reapareciendo Marco Antonio Flores, Gonzalo Flores, Inés Consuelo Murillo y Lorenzo Galo Galeano. Todos ellos manifestaron haber estado detenidos en manos de la policía durante todo el tiempo que duró su desaparición y haber recibido malos tratos de la misma. El mismo director de la D.N.I. reconoció públicamente que tenía todavía una serie de desaparecidos en su poder, que los iría haciendo aparecer según fuera oportuno y conveniente. Estas declaraciones escandalizaron a la opinión pública porque con ellos el mayor Juan Blas Salazar confesaba la violación de las normas constitucionales y se convertía en un deliciente confeso contra el que cualquier juez podría actuar de oficio exigiendo su inmediata detención. Nada de eso pasó, pero las desapariciones parecen haberse detenido de momento.

Es evidente que el primer semestre de este año 1983 ha visto recrudecerse la represión y las nuevas formas de la misma, asesinato con matices políticos y desapariciones, que desde el año 1980 comenzaron a tener un peso cada vez mayor en la vida del país. Y es imposible dejar de es-



tablecer una conexión entre este aumento de la represión y el endurecimiento de la política exterior hondureña. En los tres últimos años se ha mantenido una auténtica guerra preventiva interna en la que se ha tratado de eliminar a todos aquellos elementos que podían constituir la base de un movimiento de oposición armada. Siendo, sin embargo, una exigua minoría la de quienes abogaban por la lucha armada, la reacción militar ha sido desproporcionada y ha desprestigiado tanto al ejército como el partido Liberal. Los civiles una vez más han demostrado mayor amor a los puestos públicos que a los principios poniendo en entredicho las posibilidades de diálogo en la familia hondureña. La derecha, por su parte, cruel y dispuesta a dar la lucha hasta el final, ha apoyado a los militares tratando de desprestigiar a toda persona que luchara en favor de los derechos humanos. Y ha aprovechado, con cierta habilidad, algunas desafortunadas declaraciones de mandatarios nicaragüenses que hablaron sin ambages de la posibilidad de financiar una guerrilla en Honduras como pago a los favores que Honduras hacía a los "contras". En resumidas cuentas, toda esta serie de violaciones de derechos humanos pareciera responder al afán de desarticular a tiempo una supuesta guerrilla que en unos años pudiera crear mayores problemas.

Sin embargo, en estos últimos tres semestres se va abriendo camino la idea de que la represión intenta en realidad limpiar una retaguardia que pudiera dar problemas a la hora de lanzar ofensivas más amplias, incluso contra otros países. A ello parecen responder también los rumores de existencia de listas de personas no gratas a los militares, al intento de revitalizar los comités de defensa en algunas zonas y los registros cada vez más aparatosos en las carreteras, más destinados a atemorizar a la población que a tener éxito en la lucha contra el tráfico de armas.

Oposición política y lucha ideológica

Durante este semestre se ha consolidado (casi se podría decir, consumado) la anulación temporal de la oposición de izquierdas. La represión ha dado golpes realmente efectivos (Herminio Deras, Efraín Duarte) mientras que la amenaza y el miedo han ido haciendo el resto. Más de 300 militantes de grupos de izquierda han salido del país, lo que reduce enormemente las posibilidades de una izquierda ya de por sí débil y dividida. Muchos otros se han retirado a una especie de es-

tado de hibernación no combativa en espera de mejores tiempos.

Las pocas organizaciones que quedan bajo el control de la izquierda se conforman con sobrevivir en la legalidad y sacar de vez en cuando algún comunicado en contra del terrorismo de Estado. Los grupos político-militares que se estaban iniciando en el país han quedado prácticamente anulados. Tras un 1982 en el que se produjeron operativos espectaculares, el primer semestre de 1983 ha carecido de cualquier tipo de presencia guerrillera. En definitiva, estos grupos parecen estar purgando en la actualidad el pecado de querer empezar la casa por el tejado, sin que se vea de momento ningún tipo de análisis crítico sobre su propio tipo de actuación. Las declaraciones de guerra al régimen "militar-liberal" o las afirmaciones de que se está preparando "algo fuerte" no dejan de causar un poco de risa al tiempo que en nada contribuyen a mejorar la situación interna. El olvido del trabajo con las masas y el dogmatismo parecen haber llevado a la izquierda hondureña a un callejón de difícil salida.

Así las cosas, el protagonismo de la oposición ha pasado a partidos como la Democracia Cristiana o el Pinu, especialmente el primero. La Democracia Cristiana influye en el movimiento campesino de mayor combatividad, y en cierta manera controla la Central General de Trabajadores. Lleva a cabo una sistemática propaganda en contra de la represión y presenta un rostro político civilista y moderno. La actuación del diputado solitario que mantiene en el Congreso trasciende la simple representación partidaria para convertirse en un símbolo de ética y profesionalidad política. Sin embargo, salvando individualidades, da la impresión de que la D.C. no desea sobrepasar el nivel de oposición de las declaraciones públicas, las acusaciones y los manifiestos. Este hacer política sobre el papel impreso únicamente, le resta fuerza e impedirá, probablemente, que la D.C. se convierta en un movimiento alternativo respaldado por las masas. Algo parecido se podría decir del Pinu que, aún en menor escala que la Democracia Cristiana, ha quemado también sus cartuchos en favor de una convivencia más cívica y civilizada de Honduras.

Dentro de este tipo de oposición pobre y débil, apoyada en declaraciones y esperanzada en que presiones externas mejoren la situación interna a base de dulcificar la política de Reagan o sus



consejeros en el área, tienen un relieve relativamente grande personas o instituciones pequeñas e independientes. Una editorial, un centro de documentación, una comisión de derechos humanos con muy pocos miembros activos, un director de periódico, una articulista concreto, un diputado, cobran una dimensión exagerada ante la opinión pública, pues cargan con un papel de oposición que normalmente deberían llevar instituciones de otro tipo. Sin embargo, los resultados, en su conjunto, no dejan de tener cierta fuerza, superando en ocasiones incluso la efectividad de los dos partidos políticos de oposición en Honduras que si se exceptúa el primero de mayo, se mueven más en niveles un tanto inorgánicos. Ello favorece la oposición de "individualidades", lo mismo que una hábil represión selectiva que tema menos a los individuos (y más por otra parte, si tienen buenas conexiones internacionales) que a los dirigentes de grupos decididamente opuestos al *statu quo*.

Aunque en un nivel diferente, es interesante también reseñar que a lo largo de este semestre se ha seguido profundizando la separación entre los sectores de la oligarquía que detentan el poder real y la Iglesia. Efectivamente, nos encontramos en Honduras con un monopolio del poder de parte de sectores guerreristas, radicalmente anti-comunistas, partidarios de una libertad de empresa a ultranza y amantes de crecer en torno al capital (y la dependencia) extranjero. Los abusos de los derechos humanos, el alineamiento tan burdo en torno a intereses no nacionales (léase la política de Reagan), la insensibilidad social y la alianza con grupos anticomunistas como Causa, dependiente de un grupo religioso sincretista de origen coreano, han empujado a la Iglesia a marcar distancias con los sectores dominantes. El te-

ma de la paz ha sido el *leit-motiv* empleado por la Iglesia con más frecuencia para oponerse al actual estado de cosas. Campañas de oración, declaraciones públicas de una evidente fuerza pacifista, han contribuido por una parte a darle un mayor prestigio a la Iglesia en el ámbito nacional, y por otra, a constituir la en un freno para los planes belicistas. En la lucha ideológica el enfrentamiento con Causa ha llevado a muchos sectores de la Iglesia a comprender lo nocivo de cierto tipo de anticomunismo, y ha colocado con ello a dichos sectores en una plataforma mucho más abierta al pluralismo y a la defensa de la libertad de pensamiento. La Iglesia está dando muestras de un apartarse de los nuevos rumbos de los hombres en el poder. Y aunque los movimientos de Iglesia son habitualmente lentos, no cabe duda de que se produce por primera vez, en tiempos recientes, un alejamiento que no es ya de individuos, sino de tipo institucional. Si las cosas prosiguen su rumbo, las consecuencias serán sin duda dignas de estudio y análisis.

Y entramos así en la lucha ideológica. Abandonados por la Iglesia, rechazados por la inteligencia del país, los hombres del poder han tenido que recurrir a instituciones del exterior para que den algún tipo de coherencia ideológica al proyecto que se traen entre manos. La elección recayó en Causa, ya mencionada, cuyos directivos prometían no sólo una racionalización del anticomunismo, sino dinero y favorecer en periódicos norteamericanos la causa hondureña. La radical oposición de la Iglesia el desprestigio internacional de la secta Moon, con la que en última instancia está conectada Causa, y una cierta xenofobia presente incluso en algunas gentes de derecha, frenaron la masiva entrada de la institución coreana. Con un respetable influjo todavía en la vida ideológica de la derecha, y con planes de expansión, Causa sigue presentándose como una posibilidad de radicalización de la derecha y de expansión de sus simpatizantes. La nueva universidad les ha abierto de hecho las puertas y el nuevo rector se confiesa admirador de Bo Hi Pack (coronel sudcoreano y vicepresidente de Causa) a quien compara con los grandes enciclopedistas franceses. La pobreza mental de los "intelectuales" hondureños de derecha queda una vez más expuesta al público.

De mayor repercusión que Causa sería la constitución de APROH, Asociación para el Progreso de Honduras. Esta organización, en la que los miembros participan a título personal y

nunca como representantes de instituciones, trata de convertirse en el intento más serio, hasta el presente, de ciertos sectores de la empresa privada, por controlar la vida económica, política e ideológica del país. Se trata, en definitiva, de estructurar un tipo de organización que cohesione a los sectores dominantes por encima de las discusiones y diferencias políticas o gremiales. Miembros del ejército, empresarios, sindicalistas, profesionales, se dan cita en esta organización para "ponerse de acuerdo con objetivos comunes". La política de gremios o incluso de partidos quedaría supeditada a los acuerdos "entre caballeros" que se tomaran en la institución. La presencia poderosa del grupo Facussé, la presidencia del general Alvarez Martínez, indican que no existen diferencias entre los actuales sectores en el poder y esta institución que más bien parece nacida para perpetuar en el poder a quienes hoy lo detentan. Ligados a Causa (los pocos empresarios con un pensamiento político moderno no son anticomunistas), APROH ha tenido que sufrir la humillación de que la Iglesia no estuviera presente ni en el muy publicitado momento en que se les entregó la personería jurídica, ni, por supuesto, con ningún representante entre sus miembros.

Mientras en la oposición aumentan los personajes comprometidos con la democracia, el pluralismo y la vida civil, los sectores dominantes tienden a radicalizarse en sus posiciones de derecha. La represión, el guerrerismo, la violación de los derechos humanos, forzosamente engendra justificaciones ideológicas ultraderechistas que a la larga tienden a aislar a los hombres del poder. La política de Reagan ha tenido los efectos lógicos en la ideología dominante, alentando la unificación de todos los que bajo distintos puntos de vista mantienen un proyecto conservador para Honduras. Aunque se detuviera la aventura guerrerista norteamericana, el servicio al conservadurismo está ya hecho. Las tensiones que habrá que sufrir antes de poder desmontar los actualmente consolidados mecanismos de poder, y el costo social que puedan tener, sólo el futuro lo podría decir. Pero ese futuro, desde ahora, cobra cada vez más unos tintes sombríos para la pobre Honduras. El abandono de todo dogmatismo, la unidad de todas las fuerzas democráticas, la recuperación del contacto con el pueblo, son hoy tareas cuya urgencia es cada vez mayor. Al menos eso nos dicen con meridiana claridad estos seis meses que acabamos de analizar.

